



ACERCA DE LA ANULACION DE LA LEY DE CADUCIDAD

Los inspiradores de la venganza y el revanchismo no descansan, esa es una virtud que hay que reconocerles. No obstante, como los objetivos que permanentemente persiguen, son de tal destructividad, que lo único que hacen es no permitir salir al país adelante, y mirar hacia el futuro. No, su maldad, especialmente la intrínseca al Partido por la Victoria del Pueblo (P.V.P.), pequeño nucleamiento que agrupa a los mas resentidos activistas de la política radical de izquierda y anarquista, hace lo posible y hasta lo imposible para romper todo lo que pueda del Estado, su enemigo natural desde sus primeros ideólogos.

Y ahora han acertado en el blanco. Van a intentar hacer trizas la Constitución de la República ya que experimentalmente les va a servir para futuras proclamadas Asambleas Constituyentes que ni saben para que serán. Según dicen. Pero muy bien que lo saben y siguen el camino de los Chávez, de los Evo Morales y todo ese entorno malvado que se cierne sobre América Latina.

El intento de anulación de la Ley de Caducidad es el primer paso. Ya lo verán...

Tte. Cnel. José N. Gavazzo
Prisionero Político

TODOS SEREMOS COMPLICES

Con motivo de la puesta en marcha de la campaña para intentar anular la Ley No. 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, nuevamente nos obligan a escuchar eslóganes y conceptos que considerábamos perimidos de nuestra vida política. Pues no, no es así. Parecería que los orientales estamos condenados a perpetuidad a seguir viviendo en el pasado, y peor aún, en un pasado que no es el real sino uno tergiversado maquiavélicamente por el Frente Amplio, a través de sus dirigentes.

En los medios de comunicación serios, escuchamos las voces disonantes con esta campaña, que por otra parte y esencialmente, se inscribe en el plano electoral, de tal modo, que el votante quede embretado en un “paquete” inseparable: votar por la anulación de la ley debe significar también darle el voto al Frente Amplio. Aunque explícitamente no lo digan, ese es el objetivo principal. Y visto así, es una maniobra electoral, que dentro de los parámetros con que se manejan esos asuntos, es lícito, aunque lo ético rechine.

Sin lugar a dudas quien lleva la batuta de esta orquesta rojinegra es el “sindicalista” Luis Puig, a quien, si expresara sus ideas en forma respetuosa, aunque en sus antípodas,

lo respetaríamos. Pero resulta que no es así. Mas allá de decir falacias acerca de nuestra historia reciente, que ciertamente tienden a engañar a los ciudadanos que no han vivido los tiempos ni las situaciones a las que él refiere o simplemente las desconocen, lo hace en forma irrespetuosa y hasta insultante para con quienes disienten con él en el pensamiento, con una soberbia propia de su organización, el P.V.P. del F.A. Recurre a la siempre disponible y eficaz “derecha”; a los “impunes”; a los “abogados de los impunes”, a los “terroristas de Estado” y a toda una gama de seres o grupos infrahumanos, ya que en eso se transforman quienes discrepan con él. Todo esto está inscripto dentro de la hipocresía política y personal con que se manejan los asuntos en el Frente Amplio, pues mientras claman por una campaña electoral que mire al futuro, lo primero que hacen es tratar de anular una ley vigente hace mas de veinte años, ratificada por la ciudadanía en un plebiscito y mantenida firme por todos los gobiernos democráticos hasta el año 2005, y que por si fura poco, se refiere a hechos sucedidos hace alrededor de 35 años.

No vamos a reiterar los conceptos que diariamente vemos en la prensa contrarrestando, la mayoría de las veces muy tímidamente, los exudados discursos, llenos de epítetos y descalificaciones, pero vacíos de contenido legal y conciencia ciudadana. Todos los ven. Es entonces cuando no nos dejan otra alternativa que recordar a quiénes está defendiendo el Sr. Luis Puig, quien generaliza para disimular, pues sabe que no puede reivindicar a sus compañeros de partido, ya que los mismos, en su mayoría fueron inicialmente, ya desde el año 1956, delincuentes comunes, como Juan C. Mechoso y su hermano Alberto, o Adalberto Soba, o Gerardo Gatti o tantos otros. Son los mismos que luego pasan a formar inicialmente el aparato armado de la Federación Anarquista Uruguaya (F.A.U.) que posteriormente, a partir de 1968, se transforma orgánicamente en la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (O.P.R. 33), donde ubicamos a los mismos hermanos Mechoso, a Soba, a los también hermanos Gatti, a Washington Pérez, junto al actual Prosecretario de la Presidencia de la República y hermano del Presidente, Jorge Vázquez, entre otros. Siguen entonces “Los Libertarios”, para finalizar mutando en el Partido por la Victoria del Pueblo (P.V.P.). Todas las nombradas fueron organizaciones terroristas responsables de robos, rapiñas, secuestros extorsivos, asesinatos, atentados explosivos e incendiarios y una variada gama de delitos, tanto en Uruguay como en Argentina, donde ya como P.V.P. asentaron su base operativa en coordinación con el también grupo terrorista argentino “Montoneros”.

No entraremos en el detalle de esas acciones terroristas, tanto ejecutadas como tentadas, ya que la mayoría de las mismas se encuentran ampliamente detalladas en los libros “Memorias de la Resistencia” del ex secretario general del P.V.P., Hugo Cores, “Acción Directa Anarquista – Una Historia de la F.A.U.”, de Juan C. Mechoso, que de por sí, constituyen una confesión pública, pudiéndose complementar con múltiple información existente en otros libros, prensa e internet. Igualmente, no podemos omitir hacer una referencia obligatoria, en estos días de tanto sospechoso patriotismo oficialista, respecto a los restos mortales del Gral. Artigas, ya que, en contraposición, el silencio absoluto reina sobre la ubicación de un Símbolo Nacional original, como lo es la Bandera de los 33 Orientales, que sigue en poder de quienes nos la hurtaron: el P.V.P. Nada de esto parece ser óbice para que el Sr. Luis Puig, “olvide” que fueron aquellos quienes él hoy defiende los que rompieron para siempre un estilo de vida que teníamos los uruguayos, introduciendo la intolerancia, la violencia y hasta el crimen político, en

un país tolerante y pacífico, del cual intentaron apoderarse a través de las bocas de sus fusiles. “Olvidando” todo eso, hoy pretende convertirse en adalid de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos, todos ellos, valores violentados por sus “compañeros”.

En el caso concreto de mi persona, huelga decir que estoy al margen de cualquier interés personal en mantener la vigencia de la citada Ley, ya que de hecho, ilegalmente, como lo han expresado a través del tiempo múltiples y reconocidos profesores de Derecho, el Poder Ejecutivo la ha avasallado, privándome ilegítimamente de mi libertad. El propio Dr. Gonzalo Fernández confirmó la razón de mis dichos antes de asumir cargos de gobierno, pero luego, procediendo igual que el Sr. Puig pasó a sufrir de amnesia selectiva. Pero que no me afecte en lo personal, no significa que no pueda discrepar con lo que pretende hacer con la Ley el Sr. Puig y sus socios. En lo referente a la legalidad de la supuesta “anulación”, no tengo más autoridad técnica que la de cualquier ciudadano, para discrepar con tal intención, pero quienes sí la tienen, por su profesión o por su actuación política, no deberían estar sujetos a los insultos soeces que permanentemente este señor y sus socios, les lanzan. Recientemente ha expresado que quienes no voten por la anulación de la ley de caducidad serán quienes apoyan al terrorismo de Estado, figura jurídica inexistente pero muy bien aprovechada por quienes como él, practican una política “göebeliana” en la información o en el discurso, lo que nos recuerda, que parecería que no se ha extinguido aún el concepto de “cascañaje” con el cual estos iluminados se referían a todos aquellos que no participaban de sus ideas terroristas.

Estimo que sería buena cosa que el Sr. Puig recordara al eminente jurista citado, Dr. Gonzalo Fernández, grado 5 de Derecho Penal, cuando afirmó en el semanario “Brecha” del 27 de marzo de 1997: **“Como jurista debo atenerme a la caducidad y sepultar fantasías penales. De ahí que no alcance a percibir el sentido de esta nueva denuncia, empecinada en recorrer una vía muerta”. En suma: el capítulo penal de los militares está definitivamente clausurado.** O cuando en “La República” el 01 de Junio de 2001 expresó: **“No existe ninguna norma en el Derecho Positivo que establezca que la amnistía o el indulto son revocables”.** También dijo a la Revista “Tres” del 21 de marzo de 1997: **“Que de acuerdo a lo previsto en el Art. 4º. de la Ley de Caducidad, la justicia no puede investigar nada, es el Poder Ejecutivo el que tiene que hacerlo”.** Y muy claro fue en el semanario “Búsqueda” del 04 de Octubre de 2001 donde se expresa: **“Tengo unas irrefrenables ganas de darles un curso básico de derecho”**, cuando se dispuso a responder a una pregunta del público, que sugería que las personas presuntamente responsables de violaciones a los derechos humanos fueran denunciadas por la Comisión Para la Paz ante la Justicia, asunto que antes había sido respondido varias veces.

En fin, parecería que la situación general es más o menos así: “Dentro de la Ley lo que se pueda, fuera de la Ley todo lo necesario”. “Démosle una jubilación de por vida a aquellos terroristas que atentaron contra la Nación, por ejemplo, asesinando robando, secuestrando, extorsionando, haciendo atentados explosivos e incendiarios y en cumplimiento de la ley de amnistía dejémosles libres a todos, pero a los militares, policías y civiles que pudieran haber cometido cualquier delito, anulemos la ley de caducidad y mandémoslos a todos a la cárcel”. ¡Viva la venganza! ¿Y la certeza

jurídica, la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, la cosa juzgada, el impedimento legal de anulación de amnistías o indultos, la presunción de inocencia y la no inversión de la carga probatoria? Bien Gracias. Esto es lo que está pasando en el Uruguay de hoy. En el mío, en el suyo.

Quienes sin cesar miran al pasado, deberían reflexionar acerca de las recientes declaraciones del Ministro de Defensa del gobierno de Lula, Nelson Jobim, quien aseguró que las iniciativas destinadas a procesar a los acusados de torturas durante la última dictadura militar “sólo están movidas por la revancha y no tienen ningún soporte jurídico”. “Una cosa es el derecho a la memoria y otra la revancha”. El ministro, continuó su argumentación y afirmó que “hay países sudamericanos que todavía están rehaciendo su pasado y no construyen futuro”.

Tte. Cnel. José N. Gavazzo